

CIUDADES

VOLUMEN 5

Lúcio Kowarick y Eduardo Marques
editores

São Paulo

Miradas cruzadas: Sociedad, política y cultura



OLACCHI

Organización Latinoamericana
y del Caribe de Centros Históricos

Editor general

Fernando Carrión

Coordinador editorial

Jaime Erazo Espinosa

Comité editorial

Fernando Carrión

Michael Cohen

Pedro Pérez

Alfredo Rodríguez

Jaime Erazo Espinosa

Diseño y diagramación

Antonio Mena

Edición de estilo

Alejo Romano

Traducción

Daniela Vacas

Impresión

Crearimagen

ISBN: 978-9978-370-23-0

© OLACCHI

El Quinde N45-72 y De las Golondrinas

Tel.: (593-2) 2462 739

olacchi@olacchi.org

www.olacchi.org

Quito, Ecuador

Primera edición: septiembre de 2011

Contenido

Presentación	7
Prólogo	9
I - Lecturas urbanas	
Vivir en riesgo: Sobre la vulnerabilidad social y civil	27
<i>Lúcio Kowarick</i>	
Movilidades urbanas: Hilos de una descripción de la ciudad	53
<i>Vera da Silva Telles</i>	
Recientes dinámicas de la pobreza y de las periferias	81
<i>Eduardo Marques y Renata Bichir</i>	
II – Trabajar y vivir	
Favelas y periferias en los años 2000	109
<i>Camila Saraiva y Eduardo Marques</i>	
El Centro y sus cortiços: Dinámicas socioeconómicas, pobreza y política	137
<i>Lúcio Kowarick</i>	
Transformaciones productivas y territorio en la ciudad de São Paulo	167
<i>Álvaro Comin</i>	

Crecimiento de la población en la Región Metropolitana de São Paulo: Deconstruyendo mitos del siglo XX	203
<i>Rosana Baeninger</i>	

III – Identidades y participación

Movimientos sociales y articuladoras en el asociativismo del siglo XXI	233
<i>Adrian Gurza Lavalle, Graziela Castello y Renata Bichir</i>	

Relaciones entre movimientos sociales e instituciones políticas: El caso del movimiento de vivienda	261
<i>Luciana Tatagiba</i>	

Estrategia partidaria y divisiones electorales: Las elecciones municipales post-redemocratización	285
<i>Fernando Limongi y Lara Mesquita</i>	

Extranjeros y la ciudad de São Paulo: Procesos urbanos y escalas de actuación	315
<i>Maria Cristina da Silva Leme y Sarah Feldman</i>	

IV – Periferias: Música, cine y violencia

El rap y la ciudad: Reenmarcando la inequidad en São Paulo	345
<i>Teresa P. R. Caldeira</i>	

Cine contemporáneo y políticas de la representación de la (y en la) urbe paulistana	369
<i>Esther Hamburger, Ananda Stucker, Laura Carvalho y Miguel Antunes Ramos</i>	

Homicidios: Guías para la interpretación de la violencia en la ciudad	395
<i>Paula Miraglia</i>	

Sobre los autores	423
-----------------------------	-----

Artículos y publicaciones anteriores	427
--	-----

Relaciones entre movimientos sociales e instituciones políticas: El caso del movimiento de vivienda¹

Luciana Tatagiba²

Introducción

Asistimos a una nueva inflexión en el debate latinoamericano sobre los movimientos sociales, motivada por los recientes desdoblamientos de la lucha política en el continente. Me refiero a dos procesos interrelacionados: primero, el aumento de la participación política en sus diferentes modalidades, sea en el modelo más institucional o a partir de diferentes tipos de acción directa; segundo, la ascensión de fuerzas políticas de izquierda o centro-izquierda en varios gobiernos de la región. Combinados, esos procesos —que en parte resultaron de la acción de los propios movimientos— alteran el escenario político en el cual se da la interacción entre movimientos sociales y actores político-institucionales, con interesantes implicaciones sobre la agenda de la investigación en esa área.

En el caso brasileño, la ampliación de las oportunidades para la participación institucional y la ascensión de gobiernos de izquierda son factores profundamente interrelacionados y que, en conjunto, remiten a un proyecto político —que denominamos “democrático-participativo” o “democrático-popular”— que tuvo su contenido dictado en las luchas de

1 Este capítulo es una versión reducida del artículo que integra el libro *Interrogating the civil society agenda: Social movements, civil society, and democratic innovation*, editado por Sonia E. Álvarez, Gianpaolo Baiocchi, Agustín Laó-Montes, Jeffrey W. Rubin y Millie Thayer (en imprenta).

2 Profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Unicamp, donde trabaja con los temas democracia, movimientos sociales y participación política.

los movimientos sociales y que hoy hace explícitos, en sus fisuras y contradicciones, los avances y recursos del proceso de construcción de la democracia en nuestro país.

Entre nosotros, la ampliación de la participación emergió como demanda de la sociedad civil, en el transcurso de la lucha por la redemocratización del régimen. A partir del final de la década de los 70, el agravamiento de los problemas sociales y la crisis del sector público abrieron espacio para el cuestionamiento del patrón centralizador, autoritario y excluyente que marcó la relación entre las agencias estatales y los beneficiarios de las políticas públicas, así como para el reconocimiento de la incapacidad del Estado de responder a las demandas sociales. El tema de la participación incorporaba las expectativas en relación a la democracia a ser construida: una democracia para todos, a partir de la activación de la movilización y del poder de las clases populares.

En ese contexto, la apuesta hecha por varios movimientos sociales brasileños, en estrecha conexión con determinados actores de la arena político-institucional, se insiere en la lucha “dentro del Estado” como estrategia de transformación social. El propio surgimiento del Partido de los Trabajadores (PT) entra en el ámbito de esta apuesta, una apuesta que generó largas luchas, por lo general arduas, que resultaron en la creación y el reconocimiento de nuevos derechos de ciudadanía que cambiaron el ambiente político en el cual los gobiernos deberían pasar a operar desde entonces³. Esas conquistas legales testifican los avances de una agenda de izquierda y confirman que, a pesar de todas las resistencias y contramarchas, el proyecto participativo se impone como principio en la sociedad brasileña.

Hoy, lo que se busca es saber hasta qué punto fue posible avanzar a partir de esa estrategia. Ése es un balance que críticamente se hace dentro y fuera de la academia, a partir de una mirada tal vez menos celebra-

3 Me refiero aquí tanto a los diversos mecanismos de participación directa y semidirecta instituidos por la Constitución de 1988 —como complemento a la democracia representativa—, como a las otras diversas conquistas que se siguieron reglamentando en los años siguientes: el Sistema Único de Salud (SUS), la Ley Orgánica de la Asistencia Social (LOAS), el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA, por sus siglas en portugués), el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), el Estatuto de la Ciudad, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social (SNHIS, por sus siglas en portugués), etc.

da que aquella que orientaba los análisis en los años 90. Aunque todavía haya mucho que comprender y avanzar en términos de investigación, el diagnóstico más general apunta al hecho de que los resultados de las experiencias concretas están mucho más allá de las expectativas lanzadas sobre ellas. Pero no es el caso de retomar ese debate, sobre el cual tenemos una acumulación considerable de información en Brasil⁴.

El foco ahora es otro y puede ser traducido en las siguientes cuestiones:

- En un escenario caracterizado por una oferta significativa de participación, ¿cuáles son los riesgos y las ventajas de participar y de no participar?
- ¿Cuáles son los dilemas específicos que la ampliación de los canales de participación, asociados a la emergencia de gobiernos de izquierda, impone a la acción de los movimientos?
- ¿Hasta qué punto los conceptos de autonomía e independencia o cooptación de instrumentalización son todavía adecuados para comprender la naturaleza y los significados de esas interacciones?

Al tomar esas cuestiones como norte, el texto busca explorar la relación entre contexto y estrategia, entre dinámicas coyunturales y las modalidades participativas y sus resultados. Como paño de fondo del análisis está la reflexión sobre cómo el contexto condiciona los caminos de la interacción entre movimientos sociales y actores políticos, lo que resulta en oportunidades y constreñimientos específicos. Una inspiración teórica importante aquí es la teoría del proceso político, tal como ha sido formulada principalmente por Sidney Tarrow (1997). Lo que pretende es hacer explícitas las ambigüedades y contradicciones de actuar en un contexto que, al mismo tiempo que amplía las posibilidades de los movimientos de interactuar con y desafiar al sistema político, impone elecciones nuevas y dilemáticas.

La argumentación está dividida en dos partes. En la primera presento las líneas teóricas generales que orientan el análisis. Busco desarrollar el argumento de que la relación entre movimientos sociales y sistema político está permeada por una tensión intrínseca entre los principios de

4 Desde hace más de diez años, ese balance viene siendo uno de los temas privilegiados en el ámbito del Grupo de Estudios sobre la Construcción Democrática (GECD). Para una producción colectiva, ver GECD (1999).

autonomía y los de eficacia política. En la segunda parte, exploro esa discusión remitiendo a los dilemas específicos de la participación en la ciudad de São Paulo, teniendo como referencia empírica el caso del movimiento de vivienda.

Autonomía y eficacia política: El desafío de la acción y del análisis

La literatura sobre los movimientos sociales en América Latina, bajo fuerte influencia de la teoría de los nuevos movimientos sociales, no dedicó mucha atención a las dinámicas de los movimientos frente al Estado, los gobiernos y los partidos (Gohn, 2000). A fin de cuentas, la forma de concebir los movimientos y su “novedad” estaba en muchos casos asociada a la negociación de esos vínculos. Por eso no espanta que ése haya sido, a lo largo del tiempo, un tema descuidado o, cuando mucho, tratado bajo los contornos de un concepto de autonomía aprehendido por el signo de la no relación. Pero, ya a mediados de los años 80, algunos análisis apuntaban en otras direcciones, llamando la atención hacia las consecuencias negativas de esos presupuestos sobre la conformación de la agenda de investigación en el área (en el caso brasileño, remito a Cardoso, 1983; Boschi, 1983; Kowarick, 1987; Jacobi, 1988).

Si el discurso de la autonomía, como no relación, remitía al contexto concreto de la lucha contra el Estado autoritario, un nuevo encuadramiento para el análisis de las relaciones Estado-sociedad abría camino para una agenda de investigación dirigida a los desafíos de la acción colectiva en contextos democráticos. Por esa vía, lo que estaba en juego no era solamente comprender el papel de los movimientos en los procesos de transición, sino los impactos de la política democrática sobre las dinámicas y las estrategias de los movimientos. Pero, por diversos motivos, esa provocativa agenda de investigación no encontró terreno fértil. Específicamente en el caso brasileño, lo que se vio en los años siguientes, como explica Doimo, fue el “inmovilismo teórico”, resultante de la polarización del debate entre autonomía y institucionalización, seguido, en la siguiente década, por la crisis del propio concepto del movimiento social (Doimo, 1995; Gohn, 2000; Silva, 2005).

Más recientemente, tanto los obstáculos como los avances de la lucha política concreta impulsieron nuevas direcciones al debate, apuntando hacia un concepto más relacional de autonomía que camina al lado de una concepción menos determinista de las fronteras entre sociedad civil y sociedad política (Dagnino, 2002; Dagnino, Olivera y Panfichi, 2006). Nuevas miradas sobre la relación de los movimientos sociales con el Estado, los gobiernos y los partidos cuestionan análisis consagrados que se pautan en la existencia de una oposición natural, radical e inmutable entre los campos, tomados en sí mismos como homogéneos. En los nuevos estudios, lo más interesante es percibir como la propia *relación* entre sociedad civil y sociedad política se constituye como una cuestión empírica y teórica a ser enfrentada.

En esa línea, parto aquí de la comprensión de que la naturaleza y la intensidad de las relaciones entre movimientos sociales y actores políticos son diversas, así como el tipo y el alcance de sus implicaciones. Sustento también que, a pesar de esa diversidad de los vínculos, esas relaciones están marcadas por una tensión intrínseca entre los principios de la autonomía y de la eficacia política, con repercusiones sobre las estrategias de acción de los movimientos en coyunturas políticas específicas. Dependiendo de la coyuntura, esa tensión puede presentarse de forma más o menos intensa.

La autonomía es aquí comprendida, de forma muy preliminar, como la capacidad de determinado actor de establecer relaciones con otros actores (aliados, apoyadores y antagonistas) a partir de una libertad o independencia moral que le permita codefinir las formas, las reglas y los objetivos de la interacción, a partir de sus intereses y valores. Por esa clave, la autonomía no presupone la ausencia de relación, sino la disposición y la capacidad de participar con el otro sin perder cierta “distancia crítica” que consienta colocar la propia relación como objeto de reflexión. Para eso es necesario tener poder y, en el caso de los movimientos, ese poder adviene de la fuerza de los vínculos mantenidos con la sociedad civil. La inserción de los movimientos en las redes de la vida cotidiana —que, según Melucci (2002), constituye el origen de su poder— es lo que les permite realizar esa difícil tarea reflexiva, en el transcurso de la cual su propia identidad va siendo redefinida. Por esa línea de interpretación, la cuestión de la autonomía de los movimientos remitiría a un esfuerzo de investiga-

ción mucho más enfocado en el análisis de la relación de los movimientos con sus bases sociales que propiamente en su relación con el sistema político.

La referencia a la eficacia política remite a los esfuerzos emprendidos por los movimientos en el sentido de afectar el juego político y la producción de las decisiones, en una dirección que sea favorable a la realización de sus intereses⁵. A partir de la interacción más o menos intensa y continuada con actores del campo político-institucional, los movimientos buscan el acceso al poder político para producir consecuencias en el plano legislativo, en los procesos de producción de las políticas públicas, en el control sobre aparatos administrativos, etc. Al trabajar de esa forma el tema de la eficacia política —asociándola al debate sobre autonomía—, no busco discutir el suceso de las estrategias empleadas por los movimientos (o sea, cuánto ellos consiguen o no alcanzar sus objetivos políticos), sino considerar las consecuencias ambivalentes del involucramiento con el medio ambiente político sobre los movimientos y sus elecciones estratégicas. No se trata, por lo tanto, de evaluar resultados, sino de comprender procesos.

Como dije, aunque los principios de la autonomía y de la eficacia no sean contradictorios, traen a los movimientos distintas exigencias y requieren inversiones y apuestas específicas, que en general encuentran dificultad de ser compatibilizadas en la práctica. En el caso de los movimientos populares, esta tensión está todavía más presente. La disputa por el acceso al Estado y a los recursos públicos, fundamental para la conquista y universalización de los derechos básicos de ciudadanía, acaba resultando muchas veces en una sobredeterminación de los aspectos instrumentales y estratégicos de la acción, relegando a un segundo plano a la comunicación de los movimientos con sus bases. Cuando eso pasa, la identidad del movimiento pasa a definirse más por su relación con el Estado o con los partidos que a partir de su localización societaria (Munck, 1997: 17), con resultados perversos en lo que se refiere a la cues-

5 Cuando hablo de "eficacia política" de los movimientos estoy, por vicio de origen, limitando mi mirada a un tipo de consecuencia de la acción de los movimientos. Sin embargo, tengo conciencia de que los movimientos no orientan su acción únicamente por la interacción con el sistema político, y también de que la capacidad de los movimientos de actuar como agente de cambio no se limita sólo a esa interacción.

ción de la autonomía. La instrumentalización de las relaciones entre sociedad civil y sociedad política, en ese caso, parece vaciar los potenciales de cambio advenidos de las relaciones entre los campos, aunque pueda resultar en avances concretos en términos de conquistas materiales. En ese resultado, los movimientos pasan a actuar mucho más como demandantes de bienes y servicios (y a ser así reconocidos), que como actores que ofrecen a la sociedad nuevas formas de nombramiento de la realidad a partir del ejercicio de su función crítica (Melucci, 2001). Es el potencial de los movimientos para accionar los conflictos, a partir y en el interior de las diferentes modalidades participativas, el que se encuentra en jaque. Si esa tensión y esos riesgos son constitutivos de las relaciones entre movimientos sociales y sistema político, determinados escenarios los exacerban al facultar a los movimientos populares mayor posibilidad de acceso al Estado y de influencia sobre las políticas.

El movimiento de vivienda de la ciudad de São Paulo

El movimiento de vivienda es hoy el principal movimiento popular de la ciudad de São Paulo⁶. Tiene un gran poder de convocatoria y de movilización, en general articulando variados repertorios de acción, que van desde la ocupación de edificios públicos hasta la participación en espacios institucionales. Son movimientos con actuación en múltiples escalas y es común en varios de ellos la actuación descentralizada en los territorios. Son actores importantes que colocan en la agenda pública el tema del derecho a vivir, articulado al importante debate sobre el derecho a la ciudad.

Aunque fuerte y con considerable visibilidad en la ciudad, el movimiento de vivienda está muy fragmentado internamente. Hay una intensa competencia dentro del conjunto de las organizaciones que componen ese campo, y son frecuentes las divergencias y rupturas, que generan nuevas organizaciones, muchas veces con un perfil similar. El movimiento es

6 Los análisis sobre el movimiento de la ciudad de São Paulo están amparados en las investigaciones y discusiones colectivas realizadas por el Grupo de Investigación en Movimientos Sociales de la Unicamp, bajo mi coordinación.

una amplia red, heterogénea y compleja, cuyas organizaciones se cuentan por centenas. Por cierto, en el momento que escribo este texto, nuevas divergencias provocan realineamientos en el interior del campo y en breve resultarán en nuevas organizaciones, haciendo ingrata la tarea de definir las fronteras de la palestra de los movimientos en el área de la vivienda.

Uno de los aspectos más comúnmente movilizados por los actores y por la bibliografía de referencia para explicar esas disputas remite a la divergencia en relación a las formas de actuación; específicamente, la utilización (o no) de la estrategia de ocupar edificios y terrenos vacíos como forma de lucha y las ventajas y los límites del diálogo con el Estado. Una parte del movimiento defiende el trabajo en el campo legislativo y en la formulación de las políticas públicas, vía la participación en espacios institucionales como el Consejo de Vivienda y el Presupuesto Participativo, combinándolo con la presión directa (por ejemplo, las ocupaciones breves) para fortalecer esas luchas y garantizar las conquistas. En ese grupo, estarían las organizaciones afiliadas a la Unión del Movimiento de Vivienda. Otras organizaciones del campo, que se dicen más combativas, critican esa estrategia de aproximación con el Estado, las “conversaciones de gabinete”, y defienden la centralidad de la ocupación para vivir como forma de lucha. En ese grupo encontramos organizaciones afiliadas al Foro de Lucha por la Vivienda, cuyos integrantes se dicen más autónomos y defensores de la acción directa. Un importante espacio de actuación de los movimientos con el objetivo de influenciar las políticas públicas es el Consejo Municipal de Vivienda, que cuenta con el compromiso de una parte de esas organizaciones de movimiento. El Consejo de Vivienda surgió de la presión de los movimientos de vivienda y de reforma urbana. Todavía en 1990, en el proceso de discusión de la Ley Orgánica Municipal de São Paulo, éstos presentaron una enmienda popular sobre reforma urbana y gestión democrática de la ciudad, previendo la creación del Consejo de Vivienda, con un total de 12 277 firmas.

Aunque las divergencias alrededor de las formas de encaminar la lucha (resultado de las diferentes tradiciones a las que las organizaciones están vinculadas) puedan explicar algunas fragmentaciones en el interior de la red, me gustaría llamar la atención a otra fuente de tensión, por lo general no explicitada: la disputa por el acceso a los programas y recur-

sos gubernamentales, más precisamente a programas de vivienda y a políticas compensatorias para la población de baja renta. Esa tensión está relacionada, a su vez, al papel que los movimientos de vivienda pasaron a ocupar (o intentan ocupar) en la operatividad de la política de vivienda. Por esa vía podemos leer desde otro punto la cuestión de la fragmentación de los movimientos y la dificultad para coordinar las acciones en el interior de ese campo.

La propia forma en que está construida la política de vivienda, pulverizada en una decena de espacios de poder, en diversos niveles federales, estatales y municipales (Cymbalista y Santoro, 2007), lleva a los movimientos a tener que actuar en diferentes espacios y a partir de diferentes estrategias, estimulando las divergencias y la competencia entre ellos. La ausencia de recursos suficientes para atender la demanda alimenta un circuito en el cual la oferta de participación, en lugar de reforzar los parámetros y criterios públicos, parece permitir al gobierno acomodar precariamente la demanda y, al mismo tiempo, mantener su base electoral cautiva en los territorios en que los movimientos tienen ascendencia y poder.

A pesar del discurso antiinstitucional, con la apertura democrática los movimientos de vivienda fueron asumiendo cada vez más un papel de mediación entre los gobiernos y las comunidades, arrogándose el papel de organizar e influenciar la selección de la demanda por vivienda, principalmente en el caso del gobierno, así como el derecho de indicar las familias que se beneficiarán de los nuevos programas de vivienda. Muchas veces, una ocupación bien sucedida —o sea, de la cual resulte la desapropiación del inmueble— significa garantizar, para la organización o las organizaciones de movimiento que se involucraron directamente en la lucha, la prerrogativa de indicar parte de las familias a ser beneficiadas.

Conseguir junto al gobierno que un porcentaje de los “beneficios” (en la forma de unidades de vivienda o políticas compensatorias, como Beca Alquiler u otros proyectos) venga a su organización es fundamental para cualquier liderazgo, ya que en eso consistirá su poder de convocatoria junto a las bases. Por otro lado, la capacidad de negociación y presión junto a las innumerables agencias estatales responsables por la política depende del número de militantes que la organización sea capaz de reclutar. No es una ecuación fácil. En cualquier caso, la participación es lo que

irá a garantizar la eficacia de la acción. Muchas veces, lo que llamamos “militante” es en verdad un cliente, para el cual la participación es el precio que se paga por el acceso a un bien. Por lo general, la inclusión de la familia en la lista de los beneficiarios sigue los criterios de los movimientos, que acostumbran premiar a aquellos que tienen participación más activa en las asambleas, en los actos y ocupaciones promovidos por el movimiento:

Nosotros pedimos que participe, porque su participación va a darle el pasaporte [...]. Porque, si usted no participa, yo no puedo quitarle a quien está participando para dar a quien no está participando [...]. Nosotros estamos pasando por ese problema con el desahucio [de la ocupación Plinio Ramos] porque se hizo una asamblea [...] y se decidió que quien saliera del edificio antes del desahucio no sería contemplado para algunos beneficios que salieran para las familias que se quedaran hasta el último día. Muchas familias salieron [...]. Y así no se puede, porque es una injusticia hacia quien sí participó y sufrió a la hora de la presión policial⁷.

Las personas participan de las reuniones, participan de las luchas que nosotros promovemos y están habilitadas para ser contempladas dentro de cualquier conquista que tengamos⁸.

Una vez que el acceso a los programas de vivienda pasa por la participación en el movimiento, no sólo el Estado sino también los liderazgos construyeron su clientela entre los menos favorecidos. En ese proceso, hay una interesante reconfiguración de la relación entre liderazgos y bases del movimiento, paralela a la redefinición de la relación entre el movimiento y las instituciones políticas. En ambos, como dos caras de la misma moneda, la defensa de la autonomía parece ceder espacio a cierto pragmatismo avergonzado, donde lo que cuenta es la eficacia de la acción. Ésa también es una pista que buscaremos profundizar en futuras investigaciones. Veamos ahora cómo el movimiento de vivienda buscó sobrevivir, conquistar y garantizar derechos en los juegos laberínticos de la política municipal.

7 Entrevista con un militante del Movimiento de Vivienda de la Región Central, en Bloch, 2007: 105.

8 Entrevista con un militante del Movimiento de los Sin Techo del Centro, en Bloch, 2007: 116.

Actuando en escenarios complejos

Comienzo este ítem reconociendo mi deuda con un texto corto pero muy preciso de Raúl Zibechi (2006). En ese texto, Zibechi llama la atención acerca de los impactos de la ascensión de nuevos gobiernos de izquierda (en sus diferentes matices) en América Latina sobre la actuación de los movimientos sociales y sus relaciones con el sistema político. El autor destaca las dificultades de los movimientos para situarse en ese nuevo escenario, y la tendencia a la fragmentación del campo de los movimientos, reflejando las diferentes estrategias asumidas por éstos delante de gobiernos que, aunque puedan situarse en el plano de la izquierda, muestran diferentes niveles de continuidad con el modelo hegemónico (Zibechi, 2006).

En el caso brasileño, la reconfiguración del PT está dada por la coyuntura que confiere especificidad a ese análisis. En el transcurso de los años 90, las victorias electorales de éste, el mayor partido de izquierda en nuestro país, estuvieron acompañadas de un cambio en su perfil. En esa reorientación programática, la relación con los movimientos y la propia idea de participación, aunque continuase siendo valorizada, fue asumiendo un sentido cada vez más instrumental. Como dos caras de una misma moneda, el “pragmatismo avergonzado” de los movimientos –al cual me referí anteriormente– parece encontrar abrigo en el pragmatismo de los liderazgos y gobiernos petistas⁹. En ese escenario, como voy a buscar demostrar, los riesgos a la autonomía de los movimientos en relación a los gobiernos petistas no parecen estar en la proximidad entre los movimientos y los actores políticos, sino en la distancia entre ellos.

La intensa comunicación, articulación e interdependencia entre los movimientos populares, el PT y los gobiernos petistas –que resultaron en importantes conquistas de la ciudadanía en la reciente historia brasileña– son estrategias todavía hoy muy presentes y valorizadas. Sin embargo, esa constante interacción parece darse cada vez más bajo un vacío de expectativas y apuestas comunes en relación al futuro. La apuesta principal parece ser aquella que se renueva a cada ciclo electoral. Como buscaré sustentar aquí, es esa distancia entre sociedad civil y sociedad política –en

9 *Petista* significa ‘relativo al Partido de los Trabajadores’: PT + *-ista* (N. de la T.).

escenarios específicos que favorecen la intensa articulación e interdependencia entre esos dos campos-, sumada a un tipo específico de relación entre los movimientos y sus bases sociales, la que coloca en riesgo la autonomía de los movimientos, y no la proximidad que ellos mantienen con el medio político-institucional. Las investigaciones realizadas en São Paulo ayudan a desarrollar el argumento.

La construcción de la arquitectura participativa en la ciudad de São Paulo muestra que la emergencia de gobiernos de izquierda resultó en la ampliación de los canales de diálogo con la sociedad.

Periodo	Nº	%
Antes de 1988	4	11,4
Luiza Erundina – Partido de los Trabajadores (PT) (1989 a 1992)	8	22,9
Paulo Maluf – Partido Progresista Brasileño (PPB) (1993 a 1996)	3	8,6
Celso Pitta – Partido Progresista Brasileño (PPB) (1997 a 2000)	3	8,6
Marta Suplicy – Partido de los Trabajadores (PT) (2001 a 2004)	11	31,4
José Serra – Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) (2005 a 2006)	4	11,4
Gilberto Kassab – Demócratas (DEM) (2006)	2	5,7
Total	35	100,0%

Fuente: Tatagiba, 2008: 231.

Como vemos en la tabla, la historia de la participación y del control social en la ciudad de São Paulo sigue una trayectoria irregular y discontinua, en la que la voluntad política de los gobiernos emerge como variable explicativa central. En la tabla, se nota que la creación de los espacios participativos en la ciudad se concentra en el período referente a las dos gestiones del PT (1989-1992 y 2001-2004). En 1989, la elección de Luiza Erundina colocó en curso el movimiento de ampliación y complejidad de la arena de formulación de las políticas, con la creación de varios canales institucionales de participación, entre los cuales se destacan los consejos gestores de políticas públicas y la primera experiencia de presupuesto participativo en la ciudad. En las elecciones de 2000, con Marta Suplicy, el PT reasume el comando de la capital. En los ocho años de gestiones conservadoras (con Paulo Maluf y Celso Pita), varios de esos espacios fueron cerrados y la interlocución con los movimientos pasó a darse solamente a partir de una fuerte presión en las calles. El regreso del

PT colocó nuevamente en movimiento el “acordeón participativo” (Avritzer, 2004), ampliando los espacios y los canales institucionales para la mediación política entre el gobierno y los movimientos sociales de la ciudad, entre los que se destacan el retorno del presupuesto participativo y la institucionalización de la participación en nuevas áreas como vivienda, seguridad pública, población de calle, etc. Del total de espacios participativos hoy en funcionamiento en la Alcaldía, 31% fueron creados entre 2001 y 2004.

Los diferentes proyectos políticos de los gobiernos resultaron concretamente en mayor o menor posibilidad de acceso al Estado, impactando las estrategias de acción de los movimientos. Una mirada panorámica sobre la trayectoria del movimiento de vivienda evidencia esas idas y venidas.

En el gobierno de la petista Luiza Erundina (1989-1992), el movimiento de vivienda pasó a actuar en un escenario altamente favorable, lo que no significa que la relación entre gobierno y movimiento estuviera exenta de conflictos. El área de vivienda era una prioridad del gobierno, así como el diálogo con los movimientos populares como una forma de operatividad de la política. En ese contexto, las formas de interacción con el Estado se alteraron:

Los movimientos en otros gobiernos eran meramente reivindicativos. Iban a la puerta de la Alcaldía para desestabilizar el Estado [...]. Siempre veíamos al Estado como enemigo al servicio de la burguesía. En el gobierno de Luiza Erundina, pasamos a ver al Estado de una forma diferente, ya no como enemigo, sino como el socio del movimiento (Cavalcanti, 2006: 72).

Ya en los gobiernos de Maluf y Pitta (1993-2000), la resistencia del Estado en negociar con los movimientos llevó a la intensificación de las ocupaciones, ahora no sólo en la Alcaldía, sino principalmente en la región central de la ciudad, bajo la bandera del derecho a la vivienda en el Centro. Sólo la Unión de los Movimientos de Vivienda (UMM, por sus siglas en portugués), entre 1995 y 1999, afirma haber organizado más de 30 ocupaciones en edificios públicos en el centro de São Paulo. Con el regreso del PT, en la gestión de Marta Suplicy (2001-2004), se crearon

nuevos espacios para la discusión y deliberación sobre la política de vivienda, y se implementaron nuevos programas y proyectos de vivienda para población de baja renta. Con eso, se abrieron nuevas oportunidades de actuación para las organizaciones del movimiento de vivienda, principalmente aquellas ligadas de forma más o menos directa al PT, resultando en una disminución del número de acciones de protesta, como las ocupaciones, que aminoraron considerablemente. Los movimientos mejor posicionados en el interior de la red consiguieron relativa influencia sobre las instancias gubernamentales, dirigiendo parte significativa de sus recursos para la intervención en las políticas públicas.

Fue en noviembre del 99 que intentamos la última ocupación. Y de ahí para acá yo dije: “Basta”. Yo ya estaba a punto de caer presa [...]. Después comenzaron a surgir los programas del PAT, comenzó a surgir el programa PAR, elegimos a Marta, comenzamos a discutir sobre la locación social, la Beca Alquiler, y de ahí vino el Consejo de Vivienda. Entonces se comenzó a dar un rumbo diferente a las cosas, pero hasta entonces no había nada de eso¹⁰.

En 2004, el PSDB, junto con el DEM, asume el gobierno municipal y, en el siguiente año, el estatal, colocando dificultades para la actuación en el campo institucional a las organizaciones populares ligadas al campo petista, todavía mayoría en el interior de la red. Un ejemplo claro es la actuación de los movimientos en el Consejo Municipal de Vivienda. Mientras en el gobierno de Marta Suplicy 16 puestos del Consejo fueron ocupados por organizaciones populares ligadas al movimiento de vivienda, en la siguiente gestión del Consejo, ya en el gobierno de Serra, ninguna organización ligada al movimiento popular consiguió reelegirse. El diálogo con los movimientos se daría vía encuentros bilaterales entre las articuladoras (UMM y FLM¹¹) y el secretario de Vivienda, que en esa gestión era un representante del mercado inmobiliario. En ese contexto, la presión y la movilización sobre los gobiernos municipal y estatal volvieron a ocupar la centralidad en las estrategias de las organizaciones, incluso en el caso de aquellas que habían reorientado su práctica

10 Entrevista con la líder del Foro de Cortiços, en Bloch, 2007: 113.

11 Frente de Lucha por la Vivienda, por sus siglas en portugués.

en una dirección “más propositiva”, junto con una intensificación de las acciones en el plano federal, teniendo en cuenta el contexto más favorable post-elección de Lula.

...por falta de diálogo con la alcaldía de São Paulo [...]. Entonces, no va a haber alternativa, vamos a tener que retomar nuevamente el proceso de ocupación aquí en el Centro¹².

Nosotros fuimos a Brasilia ese año que entró Lula. En el primer año y en el segundo fuimos porque había un proyecto de ley de iniciativa popular que era el Fondo Nacional de Vivienda popular [...]. Tuvimos 15 audiencias; una de ellas fue con el presidente Lula¹³.

O sea, lo que evidencia el caso del movimiento de vivienda es que, en respuesta a los cambios en el ambiente político, en particular la mayor o menor apertura del Estado a la participación, las organizaciones del movimiento alteraron sus formas de acción, revisando las estrategias de interacción con el Estado. Como resultado, los movimientos produjeron nuevos escenarios más o menos favorables a la conquista de sus intereses, que los desafiaron, una vez más, a rever sus formas de acción. Las estrategias se fueron constituyendo y modificando en el propio juego relacional, a partir de una evaluación más o menos objetiva del poder relativo de cada actor, en cada coyuntura específica. Lo que vimos en la investigación es que, en la práctica, el uso de una u otra modalidad participativa –así como la combinación entre ellas– aparece fuertemente condicionado por el contexto en el cual actúan las organizaciones del movimiento.

La existencia de una política pública que incorpora la participación popular en su proceso de planificación e implementación tiende a empujar a las organizaciones –incluso a las más radicales– a diferentes formas de negociación con el Estado. Por el contrario, una política pública menos permeable a la influencia de los actores sociales tiende a empujar a las organizaciones –incluso a las más propositivas– a diferentes formas de acción directa. Claro que la forma en que cada organización del movimiento responde a esos diferentes contextos, así como los resultados que

12 Entrevista con líder de la Unificación de Luchas de Cortiços (ULC), en Bloch, 2007: 119.

13 Entrevista con líder de la ULC, en Bloch, 2007: 99.

se obtienen, varía, entre otras cosas, en función de sus recursos organizacionales, de su posición relativa en el interior de la red, de sus proyectos políticos, etc. Además, un interesante campo de investigación a ser explorado en investigación es la forma en que contextos, proyectos y estrategias se combinan en la producción de diferentes resultados.

En los gobiernos de izquierda, los movimientos tienden a valorizar la mayor oferta de participación estatal y a disputar en esas instancias sus proyectos e intereses, pero tienden también a orientar su acción por una disposición menos conflictiva y una postura de mayor conciliación, evitando la presión sobre los gobiernos y disminuyendo el uso de la protesta como forma de negociación. Sea para garantizar los intereses de sus organizaciones o para garantizar la gobernabilidad a partir de una agenda de izquierda, los movimientos tienden a disminuir la distancia crítica en relación al Estado y al partido político, sometiendo, consecuentemente, sus agendas de más largo plazo al ritmo y a las exigencias propias de las disputas electorales. Ese proceso tiende a aumentar la fragmentación en el interior del campo de los movimientos (como también apuntó Zibechi) y puede resultar, a largo plazo, en el debilitamiento de los movimientos contradictoriamente a la incorporación de varias de sus banderas en programas y políticas de gobierno. Los dilemas de la participación en el gobierno de la petista Marta Suplicy en São Paulo son ejemplos en ese sentido.

Realizamos una investigación junto a importantes líderes de movimientos sociales de la ciudad, y les pedimos que evaluaran las características y los resultados de la participación en el gobierno de Marta Siplicy, ya en el ocaso de las luces de su gobierno. Me refiero aquí a un estudio empírico realizado en sociedad con el Instituto de Estudios, Formación y Asesoría en Políticas Sociales (más conocido como Instituto Pólis) entre 2004 y 2005. El estudio tenía como objetivo comprender si y de qué manera el proceso de descentralización administrativa impactó la forma en que la participación ciudadana se daba en la ciudad de São Paulo. Entre otras cosas, la investigación hizo evidente que la inversión de los movimientos en los espacios de participación —y, también, la lectura que hacían de los resultados y límites de esas experiencias— aparecía fuertemente condicionada por el tipo de relación establecida con los actores político-institucionales en los territorios. El informe final de la investiga-

ción está en Teixeira y Tatagiba, 2005 (los desdoblamientos pueden ser encontrados en Tatagiba y Teixeira, 2007). Las entrevistas destacaron lo positivo de ese nuevo momento,

El espacio del diálogo es mucho mayor que el de los gobiernos anteriores, los dos anteriores [...]. Ni se compara, porque antes ni llegábamos. Ahora llegamos y hablamos, y a veces ellos nos escuchan. Sin embargo, hablamos, damos nuestra opinión, criticamos [...]. Quiere decir que el espacio está abierto para el diálogo¹⁴.

Las entrevistas también apuntaron al problema: la ruptura entre discusión y deliberación, entre debate y ejecución. Una de las experiencias más recordadas fue el Presupuesto Participativo (OP). En los análisis, el tono crítico prevaleció en los relatos que reconstruyeron el recorrido que fue de entusiasmo a desencanto con el OP. El sentimiento de frustración por la falta de resultados concretos, la tendencia a la instrumentalización y la manipulación de la participación popular, la fragilidad de la representación de la sociedad civil y el uso político partidario de los espacios participativos permearon las evaluaciones sobre el OP en las diversas regiones investigadas.

La población vino al comienzo, creyendo, y llenó algunas plenarios con más de tres mil personas, porque creía [...]. La inscripción sólo fue hasta las cinco de la tarde [...] de tanta gente que participó, porque creían... Y fue decepcionante [...]. Es un canal que fue vaciándose, perdió la credibilidad¹⁵.

Para esta evaluación de los movimientos pesó la práctica de la gestión en el gobierno de Marta Suplicy, que, al mismo tiempo que instituía políticas participativas, demostrando su compromiso con la bandera de la democratización de la gestión pública, mantenía una práctica política de negociación con la Cámara de Concejales que pasaba por la lotización de cargos en las subalcaldías, tema muy presente en las entrevistas (Teixeira y Tatagiba, 2005: 78). Esa forma de gestión de la gobernabilidad tuvo im-

14 Entrevista con un militante del Movimiento de Combate al Hambre, en Teixeira y Tatagiba, 2005: 67-68.

15 Entrevista con un militante del área del niño y el adolescente, en Teixeira y Tatagiba, 2005: 57.

pactos directos sobre el ejercicio de la participación, principalmente en el ámbito de los territorios. En las palabras de los entrevistados, es como si “las subastas de subalcaldías por el ejecutivo municipal” hubieran contribuido a una relación más clientelista de los movimientos con los parlamentarios; “si ellos acumulan el poder en las subalcaldías”, los movimientos no pueden prescindir del contacto con ellos¹⁶.

Otro lado de la misma cuestión es la evaluación de los entrevistados sobre las realizaciones sociales del gobierno. El gobierno de Marta Suplicy tuvo, según los entrevistados, resultados muy positivos en el área social; pero son resultados que parecen desplazados de los canales de participación. Es decir, no pueden asociarse a conquistas provenientes de la influencia o de la presión de los movimientos.

Haciendo referencia a ese cuadro más amplio, los movimientos realizaron una interesante autoevaluación. En ella, destacaron el peso de actuar en un contexto en el cual el interlocutor del movimiento es un gobierno que debe ser presionado y, al mismo tiempo, fortalecido. En gobiernos de izquierda, los movimientos asociados a ese campo ético-político actúan bajo el filo de la navaja, intentando responder a exigencias contradictorias. Una expresión de las ambigüedades y ambivalencias que ese escenario inaugura aparece en la inquietante formulación de un líder de la UMM al referirse a la relación establecida entre el movimiento, el PT y el gobierno, en la gestión de Marta Suplicy: “Nosotros acabamos pecando, tal vez, por no exigir más de Marta, presionando más. Por otro lado, pecamos también porque no conseguimos reelegirla” (en Cavalcanti, 2006: 125).

En la estela de ese argumento encontramos un conjunto de manifestaciones como las que siguen:

Cuando íbamos donde el subcalde, o hasta el directorio [del PT], oíamos que era importante respetar la gobernabilidad. Y nosotros, como movimientos, y luchando por el partido, fuimos conniventes [...]. Yo creo que no tomamos ninguna actitud con respecto al partido, y hoy duele cuando vemos que no fuimos respetados en ningún momento¹⁷.

16 Entrevista con un militante del área de la cultura, en Teixeira y Tatagiba, 2005: 94.

17 Intervención de un líder, en São Paulo, en la oficina promovida por el Observatorio de los Derechos del Ciudadano, en Teixeira y Tatagiba, 2005: 101-102.

En la gestión de Marta pecamos [...]. Debería haber hecho más en el comienzo, pelear mucho más, con todo, y nosotros no lo hicimos por causa de esa confusión que es “nuestro gobierno”¹⁸.

Si hay un gobierno popular, disminuye el grado de presión; si hay un gobierno conservador y de derecha, aumenta el grado de presión. Es un hecho también que es posible ver el mayor avance de las políticas sociales en los gobiernos llamados populares [...]. Los acuerdos con las asociaciones, en un gobierno popular, son más construidos que en un gobierno conservador [...]; de repente eso también genera otro tipo de pacto, evitando una presión mayor¹⁹.

Si los compromisos con el gobierno popular limitan el uso de la protesta como estrategia de lucha, el intenso tránsito de los militantes hacia dentro de las estructuras estatales renueva el compromiso ahora celebrado no sólo con *el* gobierno, en el sentido general, sino con determinadas secretarías en las que fuertes nombres del movimiento pasaron a ocupar puestos de comando. Ese tránsito fortaleció indirectamente las agendas de los movimientos, al mismo tiempo que dificultó el proceso de movilización y articulación de las bases, teniendo en cuenta el desplazamiento de importantes líderes hacia la sociedad política. El tránsito de militantes se daba no solamente hacia la dirección del gobierno, sino también hacia los directorios zonales del PT, así como hacia los gabinetes de los parlamentarios ligados al partido. Según sugiere Cavalcanti, ése es un dato nuevo que marca el paso de un patrón de liderazgo voluntario a un liderazgo profesionalizado. Tomando como referente empírico el caso de la UMM, él evalúa:

Si, en el transcurso de la década de los 80 y comienzos de la de los 90, la mayoría de los líderes entrevistados militaba de forma voluntaria en el UMM, durante los años de la gestión de Marta estas mismas personas actuaban en los movimientos de forma profesionalizada; es decir, ganaban dinero para actuar políticamente (Cavalcanti, 2006: 103-104).

18 Entrevista con un representante de la ULC, en Bloch, 2007: 129.

19 Entrevista con un representante de la UMM, en Cavalcanti, 2006: 122.

Ese cambio en el patrón de liderazgo es un tema que merece ser profundizado en futuros estudios. Mientras tanto, lo que pretendo sugerir es que la presencia de gobiernos de izquierda, al mismo tiempo que amplía las oportunidades de éxito de los movimientos, parece tener como efecto colateral una mayor gravitación de los movimientos alrededor de las arenas y estructuras estatales, teniendo como dinámica propulsora las energías advenidas de las disputas electorales. Todo ese contexto obviamente impacta sobre las formas de actuación en el interior de los espacios de participación, revelando las complejas dimensiones a partir de las cuales se combinan democracia participativa y representativa²⁰.

Conclusión

En un contexto de tantas y diversas carencias, los movimientos populares en Brasil, como en los demás países latinoamericanos, viven lo que Maristela Svampa (2008) define como el dilema de acomodar la urgencia de las demandas con aspiraciones de corte emancipador²¹; un dilema que no es resuelto por la mayor apertura de espacios de participación ni por la intensificación de los canales de diálogo con el Estado, sino que se ha-ce, como vimos, todavía más complejo a partir de ellos.

Partiendo de ese reconocimiento, lo que este artículo pretendió fue explicitar las ambigüedades y contradicciones de actuar en un contexto que, mientras amplía las oportunidades de los movimientos de interactuar y desafiar al sistema político, impone nuevas y dilemáticas elecciones. Presionar y defender el gobierno, a partir y hacia más allá de los espacios institucionales de participación; hacer avanzar la agenda de izquierda imponiendo la realización de sus potenciales emancipadores y garantizar la propia supervivencia material de la organización ahora “facilitada” por la intensidad de los tránsitos entre movimientos y arenas estatales; empujar al sistema más allá de sus límites y evitar el desgarramiento de la precaria cohesión que viabiliza victorias en las sucesivas peleas electorales;

20 En Tatagiba y Teixeira (2007) buscamos examinar más de cerca lo que llamamos “combinación subordinada” entre democracia participativa y representativa.

21 Aunque la referencia de la autora sea al movimiento piquetero, creo que es posible ampliar el argumento al conjunto de los movimientos populares.

profundizar la democracia exigiendo la realización de su dimensión redistributiva y garantizar la gobernabilidad democrática desde la izquierda...: ésas son algunas de las paradójicas exigencias que los movimientos enfrentan cuando al otro lado está un gobierno que debe ser defendido de los ataques de la derecha y disputado en el interior del propio campo con tendencias que buscan limitar el juego político a los ritmos y exigencias de la lógica partidaria representativa. En ese cuadrante de exigencias opuestas, los movimientos enfrentan el desafío de coordinar sus acciones.

La consecuencia de reconocer esa complejidad y acoger las dimensiones contradictorias del presente es evitar, a toda costa, análisis dicotómicos y simplificadores. En las relaciones entre movimientos sociales e instituciones políticas (así como en el análisis de esas relaciones), el desafío, está claro, sería cómo mantener viva la tensión entre autonomía y eficacia política partiendo del reconocimiento de las fronteras entre los campos y, al mismo tiempo, del intenso y potencialmente productivo tránsito de los actores entre ellas. Reconocer la especificidad de los campos y sus lógicas específicas, sin reforzar las dicotomías y polaridades interpretativas que han limitado el avance del debate teórico, aparece en esa agenda de investigación como una de las exigencias centrales.

Bibliografía

- Avritzer, Leonardo (org.) (2004). *A participação em São Paulo*. São Paulo: UNESP.
- Bloch, Janaina Aliano (2007). "O direito à moradia: Um estudo dos movimentos de luta pela moradia no centro de São Paulo". Disertación de Masterado, USP.
- Boschi, Renato (1983). *Movimentos sociais e institucionalização de uma ordem*. Río de Janeiro: IUPERJ.
- Cardoso, Ruth (1983). "Movimentos sociais: Balanço crítico". En *Sociedade e política no Brasil pós-64*, Bernardo Sorj y Maria Almeida (ed.). São Paulo: Brasiliense.
- Cavalcanti, Gustavo Carneiro Vidigal (2006). "Uma concessão ao passado: Trajetórias da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo". Disertación de Masterado, USP.

- Cymbalista, Renato y Paula Santoro (2007). "Habitação – Avaliação da política municipal 2005–2006". En *Habitação e controle social da política pública*. São Paulo: Observatório dos Direitos do Cidadão/Pólis/PUC-SP.
- Dagnino, Evelina (2002). "Sociedade civil, espaços públicos e a construção democrática no Brasil". En *Sociedade civil e espaços públicos no Brasil*. São Paulo: Paz e Terra.
- Dagnino, Evelina, Alberto Olivera y Aldo Panfichi (ed.) (2006). *A disputa pela construção democrática na América Latina*. São Paulo: Paz e Terra; Campinas, SP: Unicamp.
- Doimo, Ana Maria (1995). *A vez e a voz do popular: Movimentos sociais e participação política no Brasil pós-70*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará.
- Gohn, Maria da Glória (2000). *Teoria dos movimentos sociais. Paradigmas clássicos e contemporâneos*. São Paulo: Loyola.
- Jacobi, Pedro (1988). "Movimentos sociais e Estado: Efeitos político-institucionais da ação coletiva". *Ciências Sociais Hoje*.
- Kowarick, Lúcio (1987). "Movimentos urbanos no Brasil contemporâneo: Uma análise da literatura". *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, Vol. 1, Nº 3.
- Melucci, Alberto (2002). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: El Colegio de México, Centros de Estudios Sociológicos.
- Munck, Gerardo L. (1997). "Formação de atores, coordenação social e estratégia política: Problemas conceituais do estudo dos movimentos sociais". *Dados*, Vol. 40, Nº 1.
- Silva, Marcelo K. (2005). *Trazendo os atores sociais de volta. Pontos para uma agenda de pesquisa sobre ação coletiva, movimentos sociais e sociedade civil*. Porto Alegre (mimeo).
- Svampa, Maristela (2008). "Argentina: Una cartografía de las resistencias (2003–2008). Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo". *OSAL*, Año IX, Nº 24: 17–50.
- Tarrow, Sydney (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.
- Tatagiba, Luciana (2008). "Participação e reforma do Estado: Sobre a arquitetura da participação em São Paulo, Brasil". En *New voices in the study of democracy in Latin America*. Washington D. C.: Woodrow Wilson Center Press.

- Tatagiba, Luciana y Ana Teixeira (2007). "Democracia representativa y participativa: ¿Complementariedad o combinación subordinada? Reflexiones acerca de las instituciones participativas y la gestión pública en São Paulo". En *Contraloría y participación social en la gestión pública*, Luciana Tatagiba et ál. Caracas: CLAD.
- Teixeira, Ana y Luciana Tatagiba (2005). *Movimentos sociais e sistema político: Os desafios da participação*. São Paulo: Polis/PUC-SP.
- Zibechi, Raúl (2006). "Movimientos sociales: nuevos escenarios y desafíos inéditos". OSAL, Año VII, N° 21: 221-230.